



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
JUZGADO CINCUENTA Y UNO ADMINISTRATIVO  
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Auto Interlocutorio No. C-130	
Proceso:	Acción de tutela
Expediente:	11001-3342-051-2026-00190-00
Accionante:	ANDRÉS FELIPE VALENCIA GÓMEZ
Accionados:	REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - REGISTRADURÍA DISTRITAL DEL ESTADO CIVIL
Decisión:	Auto admisorio

Se interpuso por ANDRÉS FELIPE VALENCIA GÓMEZ, identificado con C.C. 1.072.652.694, acción de tutela en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - REGISTRADURÍA DISTRITAL DEL ESTADO CIVIL, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al trabajo (derecho a la inclusión laboral para personas con discapacidad certificada), igualdad (derecho a la previsión, rehabilitación e inclusión social de las personas con discapacidad), y debido proceso.

Observa el despacho que la parte actora solicitó en el escrito de tutela como medida provisional lo siguiente (*índice 00003, archivo 2, documento “DEMANDA\_29\_4\_2026, 11\_48\_47.pdf”, pág. 3, expediente digital SAMAI*):

“(…) Cómo medida provisional, suspender el proceso hasta que se resuelva esta tutela con el fin de garantizar la igualdad y el debido proceso para todos los inscritos.”

El artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 dispone:

“Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado.”

En relación con la procedencia de la medida provisional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado:

“En este sentido, para que proceda el decreto medidas provisionales se requiere:

- a) Que, con base en los elementos de juicio existentes en el proceso, se advierta la probabilidad de que el amparo prospere porque surja una duda razonable sobre la legalidad de la actuación de la cual se deriva la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados.

## ACCIÓN DE TUTELA

b) Que concurra alguna de las siguientes hipótesis: (i) que sea necesario evitar que la amenaza contra el derecho fundamental se concrete en una vulneración o; (ii) cuando, constatada la ocurrencia de una violación, sea imperioso precaver su agravación.”<sup>1</sup>

Por su parte, el Consejo de Estado ha indicado que, ante la falta de una prueba manifiesta de la violación de los derechos fundamentales invocados y la complejidad del asunto, no resulta procedente el decreto de una medida provisional; al respecto:

“En este sentido y revisado el expediente, la Sala considera que no resulta viable la procedencia de la suspensión con miras a amparar los derechos objeto de la acción incoada, pues para ello se requiere de una prueba manifiesta de la violación de los derechos fundamentales del actor.

Lo anterior es reafirmado por la complejidad de los supuestos fácticos que sustentan la demanda, los cuales se refieren a la solicitud de suspender la publicación de los boletines por parte del Banco de la República, hecho requiere de un estudio más estructurado sobre la violación predicada, teniendo en cuenta que los derechos cuya protección se invocan comprenden pluralidad de aspectos y cuyo análisis hace indispensable la valoración de la totalidad del material probatorio adjuntado por el actor, así como del que pueda allegar los accionados en su oportunidad, impidiendo de esta manera que se determine prima facie la notoriedad del perjuicio cierto e inminente que presupone la medida.”<sup>2</sup>

Para el caso concreto, estima el despacho que no concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia tanto constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, ya que se requiere que la entidad involucrada manifieste lo propio acerca del presente caso para establecer con las pruebas que logren recaudarse en el trámite de la presente acción la efectiva vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

Por lo anterior, se negará la solicitud de medida provisional.

Por otra parte, se requerirá a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL que, dentro del término de un (1) día contado a partir de la notificación del auto admisorio, publique en su página web, el auto que admite y el escrito de tutela, para que los integrantes de la *“lista de seleccionados preliminar del proceso de selección para proveer unos empleos con carácter de supernumerario del nivel asistencial”*, contenida en la Resolución No. 0488 de 2026, se enteren de este trámite con el fin de que en el término de dos (2) días ejerzan su derecho de contradicción y defensa. Sobre el cumplimiento de esta orden, la entidad inmediatamente deberá informar lo propio a este despacho.

De otra parte, evidencia el despacho que en el escrito de tutela el accionante no prestó la manifestación bajo la gravedad de juramento, de que trata el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. No obstante, la Corte Constitucional en Sentencia T-556 de 1995 señaló respecto a este deber que: *“De conformidad con los artículos 75 y 78 del citado Código Procesal, aquellas declaraciones o afirmaciones hechas por el demandante respecto de los aspectos acerca de los cuales deba prestar juramento, éste se entenderá otorgado por la presentación de la demanda suscrita por el accionante o su apoderado”*; por lo que el despacho dará aplicación a dicho criterio y, en consecuencia, entiende prestado el juramento de que trata el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 con la presentación de esta acción constitucional.

En todo lo demás, el despacho observa que se reúnen todos los requisitos formales exigidos en el Decreto 2591 de 1991, razón por la cual será admitida la tutela.

En virtud de lo expuesto, se

## RESUELVE

**1. ADMITIR** la demanda interpuesta, en ejercicio de la acción de tutela, por ANDRÉS FELIPE VALENCIA GÓMEZ, identificado con C.C. 1.072.652.694, en contra de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - REGISTRADURÍA DISTRITAL DEL ESTADO CIVIL.

<sup>1</sup> Auto 259/13

<sup>2</sup> CONSEJO DE ESTADO, consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO, sentencia del 25 de abril de 2011, Radicación número: 11001-03-15-000-2011-00451-00.

ACCIÓN DE TUTELA

- 2. NOTIFICAR** por el medio más expedito y eficaz al representante legal de la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - REGISTRADURÍA DISTRITAL DEL ESTADO CIVIL, o a quien se haya delegado la facultad de recibir notificaciones, de la interposición de la presente acción de tutela, entregando copia de la demanda y sus anexos y de la presente providencia.
- 3. CONCEDER** a la autoridad referida el término de **DOS (2) DÍAS** contados a partir del recibo de la notificación personal vía correo electrónico, para que ejerza su derecho de defensa, rinda **INFORME** sobre los hechos que fundan la acción de tutela y **REMITA el expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asunto.**
- 4. ORDENAR** a la REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL que, dentro del término de un (1) día contado a partir de la notificación del auto admisorio, publique en su página web, el auto que admite y el escrito de tutela, para que los integrantes de la “*lista de seleccionados preliminar del proceso de selección para proveer unos empleos con carácter de supernumerario del nivel asistencial*”, contenida en la Resolución No. 0488 de 2026, se enteren de este trámite con el fin de que en el término de dos (2) días ejerzan su derecho de contradicción y defensa. Sobre el cumplimiento de esta orden, la entidad inmediatamente deberá informar lo propio a este despacho.
- 5. TENER** como pruebas las documentales anexas al escrito de tutela.
- 6. NEGAR** la medida provisional solicitada por la parte actora, según lo expuesto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NORBERTO MENDIVELSO PINZÓN  
Juez

DCCD

[bobvalencia89@hotmail.com](mailto:bobvalencia89@hotmail.com)  
[notificaciontutelas@registraduria.gov.co](mailto:notificaciontutelas@registraduria.gov.co)  
[pqrdistrito@registraduria.gov.co](mailto:pqrdistrito@registraduria.gov.co)

Firmado Por:

Norberto Apolinar Mendivelso Pinzon  
Juez Circuito  
Juzgado Administrativo  
51  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 943dedb62ocf59c867dac2580oc3b5d4b4cb7186c05bb7a45c1c9e60e7155359  
Documento generado en 30/04/2026 04:18:22 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:  
<https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>